

PÉREZ-DÍAZ, VÍCTOR: *España puesta a prueba: 1976-1996*. Madrid, Alianza, 221 págs., (Alianza Actualidad), 1996.

MATEO MACIÁ

El profesor Víctor Pérez-Díaz –doctor por Harvard y catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, autor de una quincena de libros en español, francés e inglés– aborda en *España puesta a prueba, 1976-1996* el estudio y la valoración de los últimos veinte años de la vida –básicamente de la vida política– española. Para ello organiza una información muy rica –sociológica, periodística– en torno a cinco grandes temas.

El volumen tiene su origen en las conferencias dictadas por el autor en el *Centre des Recherches et Études Internationales* del *Institut de Sciences Politiques* de París. Como consecuencia de las mismas redactó y publicó un libro en 1995 en francés. Sin embargo, al trabajo original, anterior a las elecciones del 3 de marzo de 1996, se le ha añadido posteriormente un último capítulo escrito a la vista de los resultados. Aunque un poco apresurado, sirve para dar al texto una vigencia mayor.

La realidad española se analiza aquí desde tres perspectivas: la confianza entre gobernantes y gobernados, auténtica piedra angular de cualquier sistema democrático, el estado de derecho y el debatido principio de responsabilidad política.

La parte nuclear del texto –los capítulos tercero y cuarto– está dedicada a los llamados «años críticos» del régimen constitucional nacido en 1978, esto es, los años 1993-1996. Críticos en la medida en que el sistema fue verdaderamente puesto a prueba –como subraya el título del libro– por las revelaciones periodísticas sobre los GAL y la corrupción político-económica, al tiempo que se alcanzaban unas tasas de desempleo superiores siempre al veinte por ciento de la población activa.

La primera cuestión abordada –aunque en forma sucinta– es la transición democrática, la «historia de un éxito» en palabras de Pérez-Díaz. La

superación de la Guerra Civil, que no podía hacerse desde el Régimen franquista –basado precisamente en aquella victoria militar– fue una de las piezas clave de aquel momento. Desde entonces y asumiendo, por cierto, un discurso cuyo origen estaba, entre otros, en los comunistas (la reconciliación nacional) las fuerzas políticas –o, más precisamente, los dirigentes de las diversas fuerzas políticas– pasarían a considerar la Guerra Civil una tragedia lejana y oscura. Todo ello supuso una atenuación de la polarización política y un discurso predominantemente centrista que permitió la elaboración de una Constitución «abierta», como lo es la de 1978. Esta y el acuerdo en tres temas básicos –política autonómica, integración en la Comunidad Europea y política económica antiinflacionista– hicieron posible la transición.

Desde entonces hasta ahora la participación electoral ha sido la normal en un entorno europeo y el sistema de partidos se ha mantenido como la referencia esencial del régimen político democrático a pesar de las bajas tasas de afiliación. Como resulta notorio, el reclutamiento de dirigentes políticos y altos cargos –en caso de éxito electoral, aunque en este supuesto se buscan también profesionales de prestigio– se basa más en las lealtades personales que en las militancias partidistas. Incluso dentro de éstas se habla de felipistas, guerristas, fraguistas, aznaristas y hasta anguitistas sin que los contenidos ideológicos o políticos de las etiquetas sean claramente discernibles.

Pero por debajo de este cuadro ejemplar circulan algunos de los problemas que recorren el período 1976-1996: tasa de paro entre el 16 y el 24 por ciento, tensión autonómica permanente, lo que Pérez-Díaz llama pudorosamente «el desarrollo de pautas de conductas de apropiación de los recursos del estado (y los medios de administración) por grupos de particulares (sean oligarquías o partidos políticos, *cliques* o cuerpos de funcionarios o coaliciones entre agentes públicos y privados)» (pág. 52), la transformación del presupuesto de registro en metáfora del gasto del Estado (entre 1985 y 1992 el Gobierno gastó anualmente una media de un 33 por ciento más de lo presupuestado), el aumento de la presión fiscal (entre 1980 y 1992 un 48 por ciento en España y un 5 por ciento en Francia) y la multiplicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (de 1'5 a 2'2 millones de personas entre 1982 y 1992).

Otro elemento muy negativo del período estudiado sería el terrorismo, con el que la sociedad española parece haberse acostumbrado a convivir.

La delincuencia común –asociada a otro de los grandes problemas, la droga– también ha aumentado durante las últimas dos décadas.

Pérez-Díaz analiza a continuación los amortiguadores de los conflictos sociales y especialmente del paro. La familia es, sin duda alguna, el más eficaz. En palabras de Pérez-Díaz, «ha hecho que todo pudiera ocurrir sin que la gente perdiera su autoestima, ni dejara de sentirse parte de un grupo y objeto de su preocupación. Lo ha hecho sin graves conflictos internos (pág. 61)». Además de la familia, otras formas de sociabilidad han servido de colchón: desde las cofradías de Semana Santa –en una sociedad cada vez menos religiosa y con unos dirigentes políticos mayoritariamente laicos, curiosamente– hasta las peñas, las fallas valencianas o las fiestas de Moros y Cristianos. El asociacionismo, en general, ha aumentado. Y aunque la tasa de afiliación sindical permanece muy baja, la capacidad de influencia social de los sindicatos sigue siendo alta, como se pudo ver en diciembre de 1988.

Resultan particularmente interesantes las páginas que dedica al debate social público. Las elecciones son cada cuatro años, pero la vida política se desarrolla a lo largo de todo el ciclo. La convocatoria electoral sería una especie de precipitado, de condensación de lo ocurrido durante los últimos cuatro años. Y en ese escenario de cuatro años, los medios de comunicación juegan un papel fundamental como amplificadores y administradores de la batalla política. Vivimos, en el plano de la comunicación pública, en un régimen dominado por los medios de comunicación. Aunque las campañas electorales estén limitadas en el tiempo, el bombardeo político de los medios es constante.

Probablemente la etapa actual de la política española no se cerrará de manera definitiva hasta que no se sentencien los casos de corrupción, espionaje y GAL. Porque los medios seguirán hablando de ellos hasta que lleguen las sentencias. E incluso después los mantendrán vivos un cierto tiempo y para ciertas ocasiones, como ocurre con los casos Naseiro y Méndez Pozo, ocurridos en el ámbito del Partido Popular. Pero una vez sentenciados es cada vez más difícil «reactivarlos». El método más habitual de reactivación es precisamente la filtración de incidencias procesales en sumarios declarados «secretos», que es lo que en muchos casos los hace más atractivos para la prensa.

En esencia, la democracia es un sistema de controles y de vigilancias mutuas. El legislativo es el poder que ha tenido históricamente la función

de control, pero ante su desistimiento –en razón de sus propios reglamentos y también del predominio general del ejecutivo– ese poder está siendo ejercido *de facto* por los jueces y los medios, bautizados como el «cuarto poder». Pérez-Díaz habla del tribalismo, de la identificación del argumentador como perteneciente a una u otra tribu argumentativa como una de las características de la comunicación pública en España. Se prefiere la confortabilidad de los propios a los argumentos de los ajenos. Así, en las tertulias políticas de una determinada orientación no hay representantes de otras tonalidades del espectro, con lo que a su vez consiguen reafirmar al oyente en sus posiciones de partida.

La segunda característica del debate público sería la omnipresencia de lo que llama Pérez-Díaz «pensamiento conspiratorio». De hecho, el ex-presidente del Gobierno, una vez liberado de su responsabilidad como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se ha autoimpuesto como primera tarea desvelar la conspiración que ha existido durante sus últimos mandatos para derribarle. Por su parte, el tribalismo de los medios se ha acentuado desde la llegada del Partido Popular al poder con una nueva divisoria entre el Grupo PRISA –víctima según unos, verdugo según otros– y los demás.

Tribalismo y pensamiento conspiratorio configurarían un entorno comunicativo próximo a lo que califica Pérez-Díaz de «realismo mágico»: «el pensamiento conspiratorio desorbita sistemáticamente la importancia de estos arreglos (que, por supuesto, existen). El pensamiento tribal reduce los costes de razonamiento de las gentes» (pág. 72). En este contexto, expresiones como la de Felipe González («asumo mi responsabilidad política») se convierten en una especie de amuletos que se blanden ante el mal. Porque como indica Pérez-Díaz, asumir en este caso quiere decir simplemente «asumo la responsabilidad de que asumo la responsabilidad» (pág. 70).

La llamada generación del 56/68 es la que ha hecho la transición. Se trata de un grupo unido por muchas experiencias comunes (hijos de clase media, antifranquistas, funcionarios, primera generación del franquismo que sale al exterior...) que vio en ese momento soplar el viento a su favor. Sin embargo, Pérez-Díaz detecta determinadas características negativas: falta de educación liberal -formados todos ellos en los años de la Dictadura- y debilidad moral. Ello explicaría algunos fenómenos de los años 80-90. Concluye afirmando que el orden social que han creado «era y es justo el contrario de su retórica».

En cualquier caso, durante los años ochenta se ha mantenido el sistema democrático y España se ha integrado en Europa (no sólo políticamente, entre 1980 y 1992 el número de conferencias telefónicas internacionales se multiplicó por cuatro), pero al mismo tiempo han aparecido los primeros síntomas de una crisis que se ha ampliado en los noventa.

De esos años se ocupan los capítulos tercero y cuarto de *España puesta a prueba* y especialmente del período 1993-1996. Escándalos políticos y desempleo son los elementos clave del momento. Las acciones terroristas van disminuyendo lentamente. Pero al mismo tiempo, la sensibilidad social cada vez es mayor contra el terrorismo, lo que constituye sin duda un elemento positivo.

El ciclo 1993-1996 se abre con la comparecencia de Felipe González ante los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid el 25 de marzo de 1993, que hizo saltar la alarma en el Gobierno. A las pocas semanas se convocaron elecciones, que se saldarían con una nueva victoria de los socialistas, aunque más ajustada que las anteriores. Tras las elecciones comenzará una cascada de escándalos similares a los denunciados en Italia, Francia o Japón y que transformaron los mapas políticos de esos países.

Pérez-Díaz reconstruye los GAL a través de los documentos judiciales, en muchos casos publicados por la prensa. También analiza las líneas de defensa del Gobierno, variables en el tiempo –desde el «no tenemos nada que ver» hasta el «estamos investigando a fondo»– pero que han coincidido siempre en poner en duda los motivos y las intenciones de quienes han denunciado los hechos (de nuevo la teoría de la conspiración). Al escándalo GAL se unirán enseguida otros muchos asuntos: Filesa, Roldán, Urralburu, Salanueva... en parte vinculados a la financiación del Partido Socialista y en parte episodios de corrupción personal al abrigo de las instituciones o la misma organización partidaria. El Gobierno y el partido –indudablemente acosado por las deudas– ejercieron un control escaso o nulo sobre esas actividades.

Durante la V legislatura se incrementó el número de comisiones parlamentarias de investigación y se llevó al Parlamento –en 1995– un paquete de leyes anticorrupción, pero probablemente ya era tarde. La relación de complicidad entre políticos y periodistas que existía desde la transición se había roto definitivamente. Autores de biografías elogiosas de Felipe González de unos años atrás se unieron a periodistas que se consideraban vícti-

mas del Gobierno, otros que nunca habían simpatizado con los socialistas y un grupo de columnistas-ideólogos y no hubo prácticamente jornada sin denuncia. Sólo el grupo PRISA asumió una tímida –pues también investigó los GAL y la corrupción económica– defensa de los socialistas. Como señala Pérez-Díaz, «los partícipes en el debate acerca de la naturaleza y el alcance de los escándalos políticos (...) lucharon por el corazón de la opinión pública. Fue una lucha que, en última instancia, el Gobierno socialista perdió» (Pág. 121).

El Gobierno anterior intentó huir de los hechos asumiendo «todo». Pero, como subraya Pérez-Díaz «hacer a alguien responsable de “todo” es como hacerle responsable de “nada”» (Pág. 128). El Gobierno y el partido manifestaban «una tendencia regresiva a una etapa pre-lógica o mágica, en la cual las palabras y los gestos equivalieran a la realidad misma (Pág. 130). Se trataba en definitiva de difuminar la responsabilidad hasta borrarla.

El segundo gran tema del período 1993-1996 del que se ocupa *España puesta a prueba* es el del paro. Al margen de las consideraciones sobre la escasa incidencia del crecimiento económico sobre el empleo y las referidas a las fuertes indemnizaciones por despido, hay que subrayar el aumento del empleo público durante los mandatos socialistas: entre 1982 y 1992 creció un cuarenta por ciento. Paralelamente, el déficit público se disparaba hasta magnitudes históricas.

Los Gobiernos socialistas no quisieron enfrentarse ni a los sindicatos ni a los poderes financieros. Jugaban en dos tableros, en expresión de Pérez-Díaz, y perdieron en los dos. En la época de Solchaga se mantuvo una peseta sobrevalorada, que perjudicaba a las exportaciones y obligó luego a una devaluación traumática. Sin embargo, España tampoco ha sido capaz durante esos años de aproximar su economía a la europea en términos relativos. La renta *per cápita* de los españoles estaba más cerca de la media europea en 1975 que en 1995 (pág. 148).

Se ha creado un mercado dual de trabajo. Por una parte, están aquéllos que tienen empleo fijo, por otra, aquéllos que van saltando de un contrato temporal a otro. Además, la economía sumergida conlleva un trabajo subterráneo que haría bajar en dos puntos la tasa de paro. Esta, felizmente, no es criterio de convergencia europeo, porque en ese caso España quedaría fuera. Los últimos Gobiernos socialistas se aplicaron precisamente a la que entonces parecía inalcanzable tarea de ajustar los indicadores económicos de

déficit y deuda públicos, interés e inflación a lo prescrito por el Tratado de la Unión Europea. Sin embargo, las encuestas hacía ya tiempo que venían reflejando un desencanto progresivo de la población por lo europeo.

Tampoco se consiguió durante la última legislatura atajar la imagen de corrupción: cinco ministros del último Gobierno de Felipe González hubieron de dimitir por diversos escándalos.

Ésta es la situación en la que se llega a las elecciones de 1996. En palabras de Pérez-Díaz, éstas «corroboraron tanto la importancia primordial de los factores que tendían a producir la derrota del PSOE como la importancia (secundaria, pero significativa) de los factores que tendían a limitarla» (pág. 173). Tras una campaña agresiva, frente a una campaña tranquila del PP, los dos partidos obtuvieron, respectivamente, el 37'4 por ciento y el 38'8 por ciento del voto.

El último capítulo de *España puesta a prueba* se centra en el nuevo papel de los nacionalistas en la política española como sustentadores de las diversas mayorías. Estos ven esperanzados la integración europea, que mermará el poder de los estados centrales. Como ha señalado alguna vez Arzallus, la Unión permite negociar directamente con Bruselas sin pasar por Madrid. Su apoyo al PP, un partido de raíz españolista, presenta dificultades en cuanto a la financiación autonómica y en cuanto a la política lingüística. En el primer aspecto parece que se han podido alcanzar acuerdos, de los que el PSOE se ha excluido. La segunda cuestión resulta más conflictiva.

El profesor Pérez-Díaz concluye su trabajo con un epílogo en el que afirma que la política es hoy un asunto tal vez demasiado serio como para dejárselo a los políticos. *España puesta a prueba: 1976-1996* es, sin duda, un libro de planteamiento muy ambicioso que pretende una explicación global del período con el afán totalizador que caracteriza a la sociología. Sin embargo, se ocupa fundamentalmente de los años de los sucesivos Gobiernos socialistas y, en particular, del último mandato. Volcado más en analizar los errores de los socialistas que los aciertos de los demás, como si sólo en ellos residiera la causa de la ajustada derrota electoral del 3 de marzo de 1996. A veces, da la sensación de ser tan sólo la «puesta en limpio», serena y reposada, de lo que la prensa ha venido publicando en forma agresiva y con contumacia memorable durante los últimos años. En cualquier caso, hay que reconocer el conocimiento profundo de la realidad española

que hay bajo este relato. Faltan más estudios en esta línea –más «poner en orden» los argumentos de los medios– frente a la inmediatez periodística.

Sin embargo, en *España puesta a prueba* se echan de menos también algunas cosas, como el análisis del papel jugado por los medios de comunicación a lo largo de todo el proceso. También, una valoración de los jueces, con tres focos: la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. En la primera parece habitar un cierto justicierismo vengador, que necesita del reflejo mediático. El segundo, resultaría condenado a una politización permanente por su origen parlamentario. Por último, como muchos Magistrados del Supremo han sido antes Vocales del Consejo se les atribuye una etiqueta en función de quién les propuso y con ello se explican sus simpatías y actitudes y hasta sus sentencias. Pero habría que hacer, para intentar entender lo que está pasando, una sociología judicial más elaborada. El componente generacional no parece significativo en este caso, pero sí, en cambio, los aspectos institucionales: la existencia de jurisdicciones especializadas, como las de la Audiencia Nacional y el nuevo poder conferido a los jueces por la Constitución de 1978.

Queda como una parte muy brillante del ensayo de Víctor Pérez-Díaz el análisis de las diversas estrategias discursivas socialistas ante los GAL. Aunque en éste se eche en falta, con todo, una consideración de los usos performativos del lenguaje y los llamados «actos de habla» tan agudamente descritos por los profesores Austin y Searle.